

Colombia Arrodiada

www.360geopolitica.org

El 16 de diciembre de 2025, Buenos Aires, Cauca, soportó un devastador ataque de siete horas perpetrado por disidencias de las FARC bajo el mando del alias Mordisco. Estaciones de policía, oficinas municipales y un banco fueron atacados con disparos y explosivos, dejando dos policías muertos, otros heridos y a civiles atrapados en refugios improvisados. Las fuerzas nacionales recuperaron el control solo diez horas después, marcando la primera vez en 24 años que un grupo armado ilegal ha destruido abiertamente un municipio colombiano.

Al mismo tiempo, ataques coordinados del ELN y grupos aliados se extendieron por 13 de los 26 departamentos de Colombia, apuntando contra civiles, fuerzas de seguridad e infraestructura crítica. El 19 de diciembre, al menos seis soldados murieron y 28 resultaron heridos en un ataque con drones y explosivos contra una base militar en la zona rural de Aguachica, Cesar, cerca de la frontera con Venezuela. Las autoridades atribuyeron el asalto al ELN. Estas operaciones han sembrado el miedo en todo el país y han expuesto la capacidad menguante del Estado para proteger a sus ciudadanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advierte que regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta se han convertido en una “tragedia de derechos humanos”, con comunidades indígenas y locales viviendo bajo amenaza constante. Solo en 2025, la OACNUDH documentó múltiples masacres y asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos, lo que subraya la necesidad urgente de una intervención estatal eficaz y de rendición de cuentas.

Muchos de estos actores armados están vinculados a la iniciativa de Paz Total del presidente Petro, enmarcando su violencia como resistencia ante una presunta posible intervención extranjera en Venezuela.

Desde 2022, las operaciones militares contra grupos armados se han detenido en gran medida, y los programas de erradicación de coca han sido suspendidos en favor de negociaciones. Como resultado, Colombia se ha convertido en el mayor productor mundial de coca, los grupos armados han ampliado su control territorial y los diálogos

de paz se han estancado. Declaraciones recientes posteriores a las elecciones y confrontaciones protagonizadas por líderes regionales en Ecuador, Argentina y Chile apuntan a intentos de influir en resultados políticos más allá de las fronteras nacionales, lo que genera preocupación por una interferencia coordinada en América del Sur.

De cara a las elecciones de 2026 en Perú, Colombia y Brasil, se espera que aumenten los riesgos vinculados a redes criminales transnacionales alineadas con el eje Petro-Maduro, con amenazas que se intensificarán en toda la región andina y el Cono Sur durante 2025-2026.

Entre los principales riesgos se incluyen la integración de grupos armados sin desarme, el financiamiento ilícito de campañas, la coacción a votantes, el debilitamiento de la independencia judicial y la desinformación coordinada, junto con señales de alerta como la desmovilización retrasada, la intimidación, la erosión institucional y una mayor tolerancia estatal hacia las organizaciones criminales.

en gran medida.

Las fuerzas de seguridad de Colombia se encuentran ahora en su punto más débil desde la era del Plan Colombia. En los últimos tres años, la administración Petro ha retirado o destituido al 40 % de los generales del Ejército y a más de la mitad de los generales de la Policía, reemplazando comandantes experimentados por oficiales políticamente alineados, pero con menor trayectoria.

Esto ha perturbado las estructuras de mando, erosionado la experiencia institucional y debilitado las capacidades antidrogas y antiterroristas. La Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) ha perdido oficiales superiores con experiencia crítica de trabajo junto a socios estadounidenses, creando una brecha significativa de inteligencia.

Poner fin a la asistencia de Estados Unidos –algo que Petro ha defendido públicamente– agravaría aún más la crisis. Más de 60 millones de dólares en financiamiento y apoyo de inteligencia de EE. UU. solo en 2024 han sido esenciales para enfrentar al ELN, al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC. Sin ello, es probable que se intensifiquen la violencia, la extorsión y el desplazamiento entre los más de siete millones de personas desplazadas internas de Colombia.

Dos elementos ilustran la distorsión moral del enfoque de seguridad actual. Primero, el gobierno ha equiparado a los grupos armados ilegales con actores políticos legítimos al referirse a ellos como “hermanos y hermanas”.

Segundo, cuando criminales peligrosos son arrestados o neutralizados, las narrativas oficiales a menudo los presentan como víctimas –“pobres personas, pobres jóvenes”–, legitimando a los actores armados mientras se socava la justicia y se profundiza la polarización social.

La violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales continúa devastando a las comunidades colombianas –en particular a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos rurales y residentes urbanos–.

Solo en 2024, 252 personas fueron asesinadas en 72 masacres, 89 defensores de derechos humanos fueron asesinados y 216 niños fueron reclutados por grupos armados. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado al gobierno a proteger a la población civil, prevenir el reclutamiento infantil y cumplir el Acuerdo de Escazú.

Hoy, los grupos armados y el crimen organizado ejercen control sobre aproximadamente el 75 % del territorio colombiano, colocando vastas regiones fuera de la autoridad efectiva del Estado. En los últimos 18 meses, han llevado a cabo 393 ataques con drones explosivos contra fuerzas militares y civiles en todo el país.

Los pueblos están sitiados. El Estado de derecho se erosiona. El oportunismo político desplaza el deber fundamental de proteger a los ciudadanos. Colombia ha llegado a un momento de ajuste de cuentas.

La ONU y los demócratas

El Secretario General de la ONU y los demócratas de Estados Unidos están desviando su enfoque de política hacia Colombia y Venezuela. Ambos países enfrentan una grave captura del Estado por redes criminales organizadas que operan con coordinación y protección de los regímenes de Maduro y Petro y de sus aliados políticos.

Al abstenerse de una condena firme y de medidas de rendición de cuentas específicas, el Secretario General de la ONU ha contribuido a la normalización de una dictadura y de un usurpador cuya legitimidad electoral es ampliamente

cuestionada. Esta postura debilita los estándares internacionales sobre democracia, derechos humanos y Estado de derecho.

Venezolanos y colombianos tienen derecho a la seguridad, a una gobernanza democrática y a la plena protección de sus derechos fundamentales–resultados que las políticas actuales no han logrado ofrecer bajo ambos regímenes.

Permitir el deterioro continuo de estos países no debería convertirse en un subproducto de los debates partidistas internos de Estados Unidos. Utilizar a Colombia y Venezuela como contrapunto para oponerse a las políticas de Donald Trump corre el riesgo de afianzar precisamente a los regímenes que niegan la democracia a sus ciudadanos.

Estas naciones no pueden reducirse a un campo de batalla político que, en última instancia, beneficia a Maduro y Petro, quienes se presentan abiertamente como aliados ideológicos. Es urgente que tanto las Naciones Unidas como los demócratas estadounidenses reevalúen y recalibren su enfoque hacia la situación actual de Colombia y Venezuela.

Estas decisiones tienen implicaciones significativas para millones de personas que actualmente viven bajo el control de grupos armados ilegales y redes criminales transnacionales. Dichos grupos obtienen poder e ingresos del tráfico de cocaína, la trata de personas, el contrabando, los secuestros, la violencia sexual y otras actividades del crimen organizado.

Varios posibles candidatos legislativos y presidenciales alineados con el presidente Gustavo Petro parecen depender de los mismos actores armados ilegales y redes de crimen organizado incorporados a la iniciativa de “Paz Total” que operan en Colombia y Venezuela, muchos de los cuales mantienen estrechos vínculos con el régimen de Maduro.

Estas estructuras criminales han demostrado un patrón consistente de intentar influir en los procesos electorales en toda la región. Hasta la fecha, existe evidencia limitada de que estas redes puedan ser contenidas eficazmente mientras se benefician de tolerancia política o protección bajo las administraciones de Petro y Maduro.

Declaraciones posteriores a las elecciones en Ecuador, Argentina y Chile apuntan a intentos de influir en esos resultados más allá de las fronteras nacionales, lo que genera preocupación por una interferencia coordinada en América del Sur.

De cara a las elecciones de 2026 en Perú, Colombia y Brasil, se espera que aumenten los riesgos de interferencia de redes criminales transnacionales alineadas con el eje Petro-Maduro, con amenazas que se intensificarán en toda la región andina y el Cono Sur durante 2025-2026.

Entre los principales riesgos se incluyen la integración de grupos armados sin desarme, el financiamiento ilícito de campañas, la coacción a votantes, el debilitamiento de la independencia judicial y *la desinformación coordinada*, junto con señales de alerta como la desmovilización retrasada, *la intimidación*, la erosión institucional y una mayor tolerancia estatal hacia las organizaciones criminales.

Bogotá, Colombia, 22 de diciembre de 2025.